

Política, violencia y reivindicación. El enfrentamiento entre los sectores oprimidos y la oligarquía entre 1860 y 1956.

Juan Santiago Grillote.

Cita: Juan Santiago Grillote (2007). Política, violencia y reivindicación. El enfrentamiento entre los sectores oprimidos y la oligarquía entre 1860 y 1956. *VII Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <http://www.aacademica.org/000-106/171>

Política, violencia y reivindicación. El enfrentamiento entre los sectores oprimidos y la oligarquía entre 1860 y 1956.

Autor: Juan Santiago Grillone

Referencia Institucional: Centro de Investigaciones sobre el Peronismo (CIP).

e-mail: juangrillone@hotmail.com

POLÍTICA, VIOLENCIA Y REIVINDICACIÓN. EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS SECTORES OPRIMIDOS Y LA OLIGARQUÍA ENTRE 1860 Y 1956.

Introducción

La consolidación definitiva del Estado Argentino, en cuanto estado-nación, que se concretó hacia 1880, fue resultado de un largo proceso de afianzamiento que culminó con una triple masacre: la represión de las montoneras federales en el noroeste, la aniquilación de la población adulta masculina del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza y el exterminio de los indígenas que poblaban el sur del territorio que acabó con tres siglos de resistencia mapuche. Desde una perspectiva weberiana puede decirse que esas tres campañas militares terminaron por estructurar un poderío unificado, bajo un control centralizado, que puso en manos de los terratenientes del litoral el monopolio de la coerción física legítima, condición necesaria, e inédita hasta entonces, para la conformación del estado.

Al abrigo de esta supremacía que ya no era seriamente cuestionada, los sectores dominantes argentinos se dedicaron a desarrollar y explotar, en su casi exclusivo beneficio, el modelo agro exportador y a favorecer la inmigración ultramarina que permitiera repoblar los territorios por ellos desertizados a sangre y fuego. Sin embargo, mientras que la importación de productos industriales o suntuosos desde Europa a cambio de materias primas daba grandeza y esplendor a esos sectores, respecto de las corrientes inmigratorias no sucedería lo mismo: por un lado, los que llegaban no eran los franceses o ingleses cultos y refinados que Sarmiento y Alberdi soñaran sino rústicos campesinos españoles, italianos y de Europa oriental que escapaban del hambre; por el otro, los recién llegados no se distribuyeron a lo largo y ancho del país sino que se concentraron en las ciudades más importantes del litoral debido a las políticas restrictivas del régimen respecto de la propiedad de la tierra.

Durante los cincuenta años de vigencia del modelo agro exportador, los sectores derrotados en las décadas de 1860-70 permanecieron a la defensiva, en una típica estrategia de supervivencia empleada por los sectores populares latinoamericanos a la espera de condiciones adecuadas para hacer oír su voz. Esa oportunidad plena y cabal demoró casi un siglo. Hasta que en la década de 1940 se dieron las condiciones para que se produjera la emergencia de esos descamisados que Scalabrini Ortiz caracterizó con la ya famosa frase “el subsuelo de la patria sublevado”. Resurgimiento popular de tal potencia y magnitud que hasta logró dejar a la posteridad una de las más preciosas piezas de doctrina constitucional igualitaria hacia fines de ese decenio: “La Constitución de 1949 constituyó en su momento la concepción más articulada de una alternativa nacional y popular en la Argentina, que incluía la definición de una forma de Estado (. . .) partiendo de la afirmación de la soberanía nacional y de la integración de nuevos sujetos sociales, a quienes se reconocía su dignidad y el derecho a participar en la construcción de una sociedad con justicia social. En un país que había comenzado un importante proceso de industrialización en las regiones del litoral, los nuevos trabajadores

incorporados a la vida política eran, en su gran mayoría, descendientes de las capas étnicas y culturales que habían sobrevivido a los genocidios oligárquicos. Esta clase obrera estaba conformada en una alta proporción por los nietos y biznietos de los guerreros mapuches del sur; de las tropas de Peñalosa o Felipe Varela; de los soldados del Paraguay autonomista y sus aliados. Pertenecían a una amalgama cultural distinta; portaban las tradiciones, los códigos, testimonios y demandas de las propuestas federales del interior. Y para responder a esas aspiraciones mayoritarias era imprescindible transformar el papel y las funciones del Estado”¹.

Entre muchas otras transformaciones radicales y duraderas de aquella década de 1940, de las cuales la Constitución de 1949 fue una de las expresiones más cabales, nos interesa aquí resaltar la reivindicación simbólica y cultural de esos sectores sociales tanto tiempo sometidos. Frente al menosprecio sistemático que los sectores dominantes han mostrado por lo propio en una multiplicidad de manifestaciones, que van desde una magnífica pieza literaria y política como el Facundo hasta una interminable serie de encandilamientos por lo extranjero, el Movimiento Nacional Justicialista hizo propios los legados y tradiciones de los sectores oprimidos, levantando las banderas de la soberanía nacional y de la justicia social. Frente a semejante afirmación de la dignidad popular, la oligarquía cometió otro de sus habituales atropellos bombardeando a la multitud en la Plaza de Mayo y quebrando nuevamente el orden constitucional. Como continuidad de la reacción, los fusilamientos de José León Suárez de junio de 1956 representan un corolario momentáneo, un cierre circunstancial a una etapa de historia argentina signada por la presencia de un enfrentamiento constante, aunque de disímil grado de intensidad según el período, entre dos patrones socioculturales antagónicos y contrapuestos, pero imbricadamente interrelacionados.

En este trabajo nos proponemos, entonces, realizar un análisis de las principales características de los procesos esbozados, entendiendo al aludido enfrentamiento como una forma si se quiere menor o mínima de la guerra, la cual representa un concepto de la experiencia histórica nacional y una conceptualización extrema de lo político; de donde se sigue que lo político y lo violento se interpenetran mutuamente en una variedad de formas que abarcan desde el pacto consensuado hasta el combate armado, pasando por la colaboración y el disenso. Todo ello inserto en una experiencia histórica nacional que no ha escatimado en matices y subterfugios, en opacidades y ocultamientos, en acuerdos y desavenencias acerca de qué es lo nacional, lo argentino, lo propio, como forma de definir que es lo otro, lo ajeno; en una polémica que incluso discute la idea de lo humano en la problematización política y cultural del concepto de raza.

Dos modelos enfrentados de país

La batalla de Caseros abre un nuevo período en la confrontación de Buenos Aires con la Confederación Argentina. El 3 de febrero de 1852 se liberan nuevamente una cantidad de fuerzas centrífugas que habían sido aplacadas por años de un gobierno centralizado y fuerte. Tan es así que unos meses más tarde los antiguos unitarios ahora devenidos en liberales separan a la ciudad – puerto y su campaña del resto del país estableciendo una dualidad de poderes reconocidos que por el lapso de una década mantendrá al país dividido.

Se enfrentan a partir de la secesión de Buenos Aires dos proyectos de país, dos ideas respecto de cómo debía organizarse la nueva nación. Y aunque ninguna de las dos ideas tenía una formulación clara, precisa ni sistemática podríamos caracterizarlas del siguiente

modo: Por un lado, el proyecto de Buenos Aires, derivación de las ideas liberales respecto de la división internacional del trabajo, que pretendía ensamblar al país al mercado mundial mediante la sola y única producción de materias primas sin elaborar o escasamente elaboradas, obteniendo con su exportación los fondos necesarios para adquirir los productos manufacturados provenientes de los centros industriales europeos: “No es casual que la subordinación argentina a su economía dominante [la británica] haya producido el crecimiento desigual del país, expandiendo el litoral, vinculado a un mercado externo, y estancando el interior mediterráneo y el noroeste, pues su producción no convenía ni a la industria británica ni a su población. De ese modo, las inversiones británicas en infraestructura y en títulos de crédito, determinaron la especialización de la producción agropecuaria y en definitiva el control del comercio exterior (. . .) De esa forma los sectores terratenientes del litoral empalmaron su política de expansión agropecuaria destinada a la exportación de materias básicas con la política de inversiones británicas”².

El modelo de economía agro-exportadora y librecambista implicaba desarrollar las zonas del país capaces de producir para el mercado externo mediante todo tipo de adelantos tecnológicos, estructurales y administrativos y desincentivar el crecimiento de las áreas cuya producción no se ajustara a las necesidades de exportación, al tiempo que abortaba cualquier tipo de industrialización que no estuviera ligado a un mínimo procesamiento de las materias primas producidas: No sólo se trataba de no elaborar manufacturas sino que durante varias décadas tampoco se procesaba la materia prima, es decir que por ejemplo se exportaba lana y no hilo, grano y no harina, cuero y no calzado, etc.

Políticamente, este proyecto suponía como premisa fundamental mantener un férreo control de la aduana de Buenos Aires, fuente de todo ingreso fiscal de consideración, por parte de los grandes terratenientes bonaerenses, el control del crédito y una política restrictiva respecto de la propiedad de la tierra de modo que la producción agropecuaria se realizara en grandes latifundios. Adicionalmente, las grandes extensiones de “desierto” debían ser “conquistadas” a fin de permitir un rápido crecimiento económico en base a la expansión agropecuaria hacia tierras improductivas. Los impulsores del proyecto adoptaron el credo liberal con una fe inquebrantable e hicieron del lema “orden y progreso” una máxima de gobierno y administración estatal, en consonancia con un capitalismo industrial y comercial en plena etapa de expansión mundial. Este modelo implicaba “subirse al tren de la historia”, aunque en el furgón de cola.

Por otro lado, el modelo encarnado por la Confederación Argentina federal se centraba fundamentalmente en el respecto irrestricto de las autonomías provinciales. Con una formulación mucho menos clara desde lo teórico, dado que la intelectualidad argentina de ese entonces era liberal sin fisuras, y a pesar de las múltiples dificultades, el proyecto urquicista logró plasmarse en la práctica por casi una década. Los caudillos federales respondían a una cosmovisión que les hacía percibir claramente que el fin de la autonomía provincial implicaba la completa desarticulación del modo de vida conocido por ellos y sus comunidades, a quienes representaron políticamente y organizaron militarmente en las montoneras. Así, desde el punto de vista federal, cualquier intento de unificación con Buenos Aires o de organización política nacional, debía contemplar esta condición fundamental, o bien ser impuesta por la fuerza.

Fue en torno a esa necesidad que se aglutinaron los caudillos federales en oposición a Buenos Aires. Ahora bien, ¿Cómo podría delinearse la tan mentada autonomía? ¿Qué decisiones pretendían reservar para sí a toda costa las provincias? Una de las prerrogativas que procuraban conservar era la del reclutamiento de tropas propias, como

así también el financiamiento de las mismas mediante barreras aduaneras externas. Demás está decir que la persistente negativa de Buenos Aires de federalizar su Aduana fue una de las principales causas de la existencia de dos formaciones estatales formalmente reconocidas, aunque es importante resaltar que durante los diez años de separación la Confederación y Buenos Aires continuaron considerándose como integrantes de una misma unidad territorial circunstancialmente escindida.

Adicionalmente, hay que decir que en buena medida la unión del interior federal en la Confederación Argentina era una construcción por la negativa. Es decir que lo que tenían de común las distintas provincias era una férrea oposición al proyecto liberal de abrir las fronteras a los productos manufacturados externos y a la decisión de concentrar en manos porteñas la administración de los fondos aduaneros. Ante un progreso muy poco auspicioso, se intentaba hacer perdurar estructuras sociales tradicionales y arraigadas, con fuertes lazos con la etapa colonial. En definitiva, la autonomía provincial tan defendida por la Confederación significaba un barrera contra el ansia centralizadora de Buenos Aires y una reserva para sí de la capacidad de decisión respecto del tipo de vida económica, política y social que cada comunidad llevaría: “Los caudillos pugnaron por reivindicar el marco provincial como ámbito natural para el desenvolvimiento de la actividad social y política. La provincia, unidad política formal legada por la colonia, pasó a constituirse casi en un símbolo de resistencia frente a los continuados esfuerzos de Buenos Aires por concentrar y heredar el poder político”³.

La lucha fue en todo momento despareja: Impulsada por un contexto internacional muy favorable, la economía porteña experimentó una permanente expansión que le permitió financiar el aislamiento mientras que, por el contrario, la Confederación no sólo no podía hacer frente a los gastos corrientes mínimos para subsistir sino que, además, una vez centralizada la aduana en Paraná, las rentas nacionales estuvieron permanentemente comprometidas antes de su percepción. A tal punto había llegado la angustiada situación del gobierno Federal que hacia mediados de 1861 era evidente la inviabilidad del proyecto sin el concurso de la aduana y el banco bonaerense. Acorralada, a la Confederación se le presentaba una opción de hierro: matar o morir. Efectivamente, la derrota en Pavón significó su muerte.

La victoria de Mitre impuso las condiciones para la consolidación de un poder centralizado que acabara con décadas de luchas facciosas. Finalmente, Buenos Aires se avenía a la unificación pero a condición de mantener bajo su control los medios financieros y fiscales, la administración de la ciudad de Buenos Aires que albergaría al nuevo gobierno nacional como huésped y la conformación ultraliberal de la legislatura provincial. La victoria de los grandes terratenientes bonaerenses fue rotunda. Había llegado el momento de dar forma duradera a la Nación.

La fórmula liberal: Orden, y Progreso

La caótica situación en que se encontraba el país no refería únicamente a la resistencia provincial a la hegemonía porteña. Hasta entonces, la República Argentina, la Nación, no pasaba de ser una entelequia sólo existente en la letra de la constitución de 1853: los distintos mercados regionales estaban poco desarrollados, dispersos y aislados a causa de medios de comunicación y transporte insuficientes e ineficaces; la coexistencia de innumerables medios de pago (tres o cuatro distintos en cada provincia) generaban una anarquía comercial que, sumada a la inexistencia de un mercado financiero, hacía poco menos que impracticable el desarrollo económico; la recaudación impositiva era

inexistente, a no ser por las diversas aduanas, que eran también víctimas del contrabando; el desorden y el mínimo desarrollo alcanzado por el aparato administrativo llevaba a que, entre otras cosas, fuera imposible saber aunque sea aproximadamente qué población había, cuáles eran los volúmenes comerciados o cuántas cabezas de ganado o hectáreas cultivadas existían; la instrucción pública era inexistente, a no ser por las órdenes religiosas que la impartían en algunas capitales de provincia.

Pero la fuente de incertezas más acuciante para el nuevo grupo dominante eran los obstáculos para la iniciativa privada provenientes de los alzamientos federales y de las incursiones de los malones. Las diversas formas en que el Estado se fue expandiendo para dar respuesta a estos problemas, se desarrolló de manera interrelacionada con el crecimiento y profesionalización del Ejército Nacional. A la penetración política desarrollada por el liberalismo mitrista en las clases dirigentes provinciales, debe sumarse la penetración ideológica mediante la nacionalización y expansión del sistema educativo y la penetración económica dispuesta mediante dispares ventajas aduaneras, impositivas o crediticias según el caso. Cuando estos métodos fallaran, la fuerza represiva impondría el Orden necesario: “El ‘orden’ aparecía así ante una esclarecida élite, como la condición de posibilidad del ‘progreso’, como el marco dentro del cual, librada a su propia dinámica, la sociedad encontraría sin grandes obstáculos el modo de desarrollar sus fuerzas productivas. Por definición, entonces, el ‘orden’ excluía a todos aquellos elementos que podían obstruir el progreso, el avance de la civilización, fueran éstos indios o montoneras (. . .) Por eso, el ‘orden’ también contenía una implícita definición de ciudadanía, no tanto en el sentido de quiénes eran reconocidos como integrantes de una comunidad política, sino más bien de quiénes eran considerados legítimos miembros de la nueva sociedad”⁴.

La unificación político – administrativa que se inicia después de Pavón permite, entre otras cosas, el aprovechamiento de una expansión del sistema financiero europeo, que rápidamente encuentra formas de canalizarse hacia estas tierras. Buena parte de esos créditos son utilizados por el estado para mejorar las condiciones del ejército. A medida que el aparato estatal se iba consolidando, cada vez más todo alzamiento que no superara el margen provincial sería calificado como “levantamiento”, una afrenta intolerable para el orden finalmente establecido. En 1864 la guerra contra Paraguay exigió a Mitre la organización de un ejército regular que originalmente contaba con 6.000 hombres, los cuales rápidamente se cuadruplicaron debido a la multiplicidad de frentes de conflicto.

Lo que en principio se pensaba como una rápida y sencilla victoria, debido a la alianza con el Imperio Brasileño y el apoyo británico (particularmente interesado en la derrota del Paraguay autonomista) se transformó en una larga y desgastante contienda contra las fuerzas paraguayas, apoyadas por varias provincias argentinas y uruguayas que no podían dejar de identificar la situación de Paraguay con la propia. El mismo ejército debió hacer frente a las rebeliones de Felipe Varela y el “Chacho” Peñaloza, para lo cual tuvo que distraer fuerzas del frente paraguayo y así prolongar el conflicto: “La lucha se produjo entre Buenos Aires, Montevideo y la nobleza de Río de Janeiro que mantenía la esclavitud, por un lado; el interior argentino, la campaña uruguaya, el sur del Brasil, y el Paraguay por el otro. Gran Bretaña apoyaba a la Triple Alianza, pues su triunfo implicaba la seguridad de su penetración (. . .) El apoyo que recibió el Paraguay de tan variados sectores de Buenos Aires, y de provincias argentinas en lucha contra Buenos Aires, no significa una alianza sino una acción natural entre regiones que entendían formar la misma nación”⁵.

El resultado de la contienda fue la derrota final no sólo del proyecto de instaurar una nación autónoma e industrial en el corazón de la colonia agrícola de Gran Bretaña, sino también el descalabro definitivo del proyecto alternativo al librecambismo impulsado por los liberales porteños, debido a la brutal represión que siguió al aplastamiento de los levantamientos del interior. Una vez “pacificado” el norte y el noroeste, el robustecido Estado Nacional, a través del Ejército Argentino, se concentró en erradicar el último vestigio de inseguridad para los terratenientes porteños: a fines de la década de 1870 el General Roca comandó la expedición que masacró a las tribus que asolaban el sur de la provincia de Buenos Aires. Para ese entonces, la maquinaria estatal que había surgido bajo la tutela bonaerense menos de veinte años antes, estaba en condiciones de imponerse por las armas aún a la más poderosa de las provincias, que perdía así el último vestigio de su supremacía: Con la llegada de Roca a la presidencia, nada quedaba en la Nación que estuviese por encima de la Nación misma: “La Argentina es al fin una, porque ese Estado nacional, lanzado desde Buenos Aires a la conquista del país, en diecinueve años ha coronado esa conquista con la de Buenos Aires”⁶.

El modelo agroexportador, o la grandeza de unos pocos

Instaurado un orden político que ya no podía ser seriamente cuestionado, los sectores vencedores se acomodaron rápidamente a la idea de que la Nación se impusiera a la Provincia, pues ello les permitía aprovechar cabalmente las excelentes oportunidades presentes en el contexto internacional. Cuando “todo estaba por hacerse”, como solían decir los funcionarios de entonces, no había recursos fiscales que fueran suficientes aunque el comercio exterior creciera a ritmo acelerado. La urgencia de conseguir capitales para la realización de obras de infraestructura llevó a los sectores dominantes a subordinarse a los intereses británicos, lo cual “. . . trajo consigo la libre navegación de los ríos y la posibilidad para Gran Bretaña de invertir en infraestructura en el Río de la Plata, como base necesaria para proveerse de los artículos que necesitaba, asegurando la calidad y volumen de sus importaciones mediante concesiones previas de créditos que debían ser pagados con las exportaciones”⁷. La Argentina recibía créditos británicos para producir las materias primas que la industria británica en expansión requería y esos créditos eran pagados con el producto de esas ventas, con lo cual todo, producto, dinero e intereses terminaban en Gran Bretaña, salvo la parte de la ganancia que se apropiaban en su exclusivo beneficio los grandes terratenientes del litoral y los comerciantes-contrabandistas porteños.

Como corolario, muchas de las obras de infraestructura que el país en marcha necesitaba nunca llegaron a concretarse y, las que sí lo hicieron, contribuyeron al crecimiento arto desigual del país, desarrollando las zonas fértiles del litoral y relegando al atraso a vastas regiones mediterráneas. Ante el florecimiento económico, los sectores dirigentes cayeron en la típica ilusión liberal de naturalizar las condiciones del presente hacia la eternidad, envalentonados por un optimismo desaforado e irresponsable: “La élite dirigente concebía como un ideal al endeudamiento externo; demostraba el crédito internacional de que gozaba la República y, por lo tanto, el prestigio nacional. Contraer empréstitos e hipotecar la riqueza del futuro no asustaba en lo más mínimo a los dirigentes argentinos”⁸.

Al mismo tiempo que aseguraba tierras y atraía capitales, el gobierno nacional fomentó el tercero de los factores productivos necesarios, la mano de obra: “Los pueblos preexistentes en el interior americano, españoles, criollos, indígenas, mestizos, se resistían al cambio urgente que la creación europea en América les imponía como una sentencia condenatoria de su destino”⁹. Por eso mismo fueron masacrados y, aquellos

pocos que lograron salvar la vida, fueron vilipendiados hasta el paroxismo por una intelectualidad imbuida del positivismo biologicista de la época. De allí que fuera plausible imaginar al país como un vasto desierto, lo cual daba sentido a la máxima alberdiana de “gobernar es poblar”, puesto que lo poco que había era inservible: “No son las leyes las que precisamos cambiar, son los hombres, las cosas; necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella”¹⁰. El acuerdo unánime con un axioma de estas características encierra una miríada de interpretaciones disímiles: Sin duda que el obrero inglés soñado por Alberdi o el refinado francés de Sarmiento poco tenían que ver con el rústico campesino italiano o español que formó el 80% de los extranjeros que llegaron al país y que resultaron absolutamente funcionales para el tipo de explotación agrícola – ganadera que se pretendía desarrollar.

Los recién llegados, parias expulsados por un sistema económico que deprimía la agricultura al mismo ritmo vertiginoso que impulsaba una industria cada vez más mecanizada y menos absorbente de mano de obra, fueron atraídos por promesas de tierras inabarcables y disponibles. Lo primero sin duda que era cierto, lo segundo sin duda que no. Las tierras incorporadas al sistema productivo fueron vendidas de antemano para financiar la expedición de Roca distribuidas sin más entre quienes participaron de la campaña. Así, entre 1878 y 1884 se repartieron 16.550.000 hectáreas de tierras conquistadas entre poco más de mil propietarios¹¹. Haciendo gala de una visión cortoplacista que repetiría a lo largo de la historia, la élite establecida favoreció los latifundios, más adecuados para la explotación extensiva que imponía la coyuntura internacional, obligando a los inmigrantes a convertirse en peones o arrendatarios si permanecían en áreas rurales, a amontonarse en las prósperas ciudades del litoral buscando cualquier medio de subsistencia o a retornar a sus países de origen, como lo hizo cerca de la mitad de los que llegaron: “La dificultad para acceder a la propiedad constituye una de las características distintivas del proceso inmigratorio argentino. La distribución de la población y su composición social se originan en gran medida en ese aspecto de la estructura productiva. El grupo tradicional de grandes propietarios y sus representantes en el poder no concebían a la inmigración más que como una fuente de mano de obra barata, a pesar de su admiración por el modelo norteamericano (. . .) Por cierto, podía parecer que los grandes dominios respondían mejor a las necesidades de la explotación agropecuaria extensiva que dictaban la nueva coyuntura económica y el mercado internacional. Lo cual no impidió que se constituyera en el origen de numerosos problemas sociales y políticos ulteriores”¹².

Arrolladora, la burguesía comercial y agro exportadora pampeana y litoraleña, ocupó el centro de la escena. Pretenciosos vencedores de una contienda de siete décadas modelaron el país a imagen y semejanza de la forzada invención de un pasado glorioso. Desdeñando aquél tiempo hundido en la tradición española y colonial, desempolvaron viejas glorias militares y se armaron un linaje de doble apellido mientras orientaban sus brújulas culturales, intelectuales, económicas y de consumo hacia París y Londres. A diferencia de la aristocracia europea que imitaban, ninguna de las “familias consulares” se atrevía a rastrear su alcurnia más allá de cien años (hasta los prolegómenos de las luchas por la independencia) lo cual, sin embargo, servía como uno de los dos elementos fundamentales para pertenecer a la casta privilegiada; el otro factor de poder era la posesión de grandes extensiones de tierras en las mejores zonas de cultivos. Un linaje cercano pero glorioso y la condición de gran terrateniente eran, entonces, características fundamentales para ser parte de esta nueva clase dirigente, férreamente cerrada a los “impuros”. Su dominio de la economía era completo y eso hacía que se consideraran a sí mismos como los únicos habilitados para ejercer el poder: “Herederos de los padres

fundadores, los 'patricios' argentinos –como gustaban hacerse llamar– consideraban que tenían derecho a manejar el destino del país. El inmigrante solo era un visitante. Debía saber conservar su lugar y aceptar la suerte que tuviera (. . .) Liberal y cosmopolita, la élite establecida ejercía sobre el país una dominación ilustrada. Defendía ferozmente sus privilegios, pero se apoyaba en la razón: animadora del progreso, su conservadorismo se teñía de filosofía positivista. Así, rechazando todo lo que representaba a la tradición hispana –luego colonial y católica– asimilada con el oscurantismo más odioso, era resueltamente volteriana y fácilmente anticlerical”¹³.

Tampoco nada de lo político les era ajeno; armaron un andamiaje político acorde a su autoproclamada condición de únicos capaces de dirigir los destinos del país. Durante cuatro décadas el presidente (o el gobernador) saliente elegía a su sucesor y era electo sin dificultades mediante métodos tan eficaces como irreconciliables con los preceptos liberales que profesaban: Las elecciones, llevadas a cabo puntillosamente según los mandatos constitucionales, eran de una relevancia política mucho menor que cualquier reunión de “notables” en el Jockey Club, en la Sociedad Rural Argentina, en algún club nocturno parisino, en el Congreso de la Nación o en la Casa de Gobierno; la preponderancia oligárquica se prolongaba en el aparato estatal, que la reforzaba. Los miembros de la clase dirigente consideraban que sólo el poder prepara para el poder, por lo cual la sabiduría política es un atributo exclusivo de las familias consulares que sólo podía ser transmitido por vía hereditaria. Comprender y tener presente este modo de pensar y de detentar el poder es imprescindible para analizar las reacciones de estos grupos ante cualquier intento de los sectores subordinados de reafirmar su dignidad humana o sus derechos políticos, sociales y/o económicos.

Los plebeyos al poder, o la intolerancia exacerbada

Tras setenta años de luchas intestinas, la victoria de la oligarquía terrateniente porteña configuró un país económicamente dependiente y socialmente injusto. Las masas de población, ya sea nativa o extranjera, toleraron los costos de la derrota y los pagaron con un alto grado de exclusión económica, política, social y cultural. Pasarían muchos años hasta que estuvieran nuevamente en condiciones de dar pelea. Mientras tanto, el devenir de estos sectores podría caracterizarse como el repliegue forzado hacia una suerte de invisibilidad que les permitiera rearmarse. Encandilada por su propio esplendor, la élite establecida no percibió la total magnitud de los procesos que se daban en los nuevos sindicatos, animados por las ideas revolucionarias que portaban algunos inmigrantes, ni en la formación de un verdadero partido político nacional de masas como la Unión Cívica Radical.

Y si bien el anarquismo estaba casi en las antípodas del radicalismo, ambas corrientes revolucionarias eran consideradas perturbadoras del orden tan duramente alcanzado. La conscripción obligatoria instaurada en 1901 intentaba complementar la tarea de adoctrinamiento desarrollada por la enseñanza primaria y el consecuente incremento de público lector de los órganos de difusión de la oligarquía (los diarios La Nación y la Prensa), pero no lograban compensar plenamente en el ánimo de los de inmigrantes el descontento provocado por el irrealizado sueño de la propiedad y por las míseras condiciones que la existencia en las grandes orbes les deparaba. La ley de residencia y la brutal represión de la revolución radical de 1905 y de las sucesivas y cada vez más feroces huelgas que los sindicatos anarquistas y comunistas llevaban a cabo desde 1907, muestran que el sistema político generaba una presión social que ya no lograba canalizar.

La abstención electoral y el aura revolucionaria obtenida en 1905 dieron a la UCR una amplia base de apoyo popular, que obligó a Roque Sáenz Peña a pactar con Hipólito Yrigoyen una salida a la situación que sirviera como válvula de escape a esa presión acumulada. Decidida a jugar el juego de la democracia, la oligarquía elegía la opción menos peligrosa para sus intereses, puesto que lo máximo que ponía en juego en esa apuesta era la apertura política a amplias capas de población antes marginadas, pero a cambio se aseguraba que en lo esencial el modelo agroexportador quedara intacto. Por el contrario, continuar como hasta entonces podría desencadenar un proceso incontrollable, dado el apoyo creciente que la UCR tenía en ámbitos militares y lo contraproducente de la represión como único medio de enfrentar la agitación anarquista: “Esa integración del radicalismo representó un mal menor. Dando una representación a la primera minoría, y sólo a ella, el poder elaboró una ley a medida del radicalismo, tendencia moderada de la oposición, que no se proponía subvertir el sistema económico y social sino ampliar la participación en la prosperidad nacional. El radicalismo era una valla de contención contra un peligro más grave para las categorías dirigentes: el ascenso de un proletariado extranjero combativo y portador de avanzadas ideologías”¹⁴.

Efectivamente, si bien es cierto que Yrigoyen desarrolló una política que las clases dominantes tildaban horrorizadas de “obrerista”, no es menos cierto que la “reparación nacional” del caudillo radical se limitó exclusivamente al ámbito político y careció de cualquier intento de revancha económica o social. De hecho, si los grupos dirigentes tradicionales se hubieran esforzado en entender cabalmente el contenido de la política radical, no hubieran tenido el más mínimo motivo de alarma. Pero la imagen de la muchedumbre desenganchando los caballos que tiraban la carroza que llevaba al nuevo presidente del Congreso a la Casa Rosada, fue demasiado atemorizante para una élite que estaba convencida de que el sufragio universal era el triunfo de la ignorancia universal: “La razón colectiva sólo es soberana, no la voluntad colectiva (. . .) la soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y que sólo es llamada a ejercerla la parte sensata y racional de la comunidad social. La parte ignorante queda bajo la tutela y salvaguarda de la ley dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional. La democracia, pues, no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías, es el régimen de la razón”¹⁵.

Si hasta la neutralidad sostenida por el gobierno argentino durante la “Gran Guerra”, duramente atacada por la gran prensa y por la intelectualidad “democrática” y anglófila, respondía únicamente a los intereses agro exportadores. No convertirse en potencia beligerante permitió a la Argentina mantener e incluso incrementar el flujo de sus exportaciones debido a que Europa concentraba sus esfuerzos productivos en armamentos y solicitaba más que nunca las materias primas extra continentales. Por eso mismo, durante la guerra se redujeron las importaciones, con lo cual el balance comercial pasó a ser positivo por primera vez, al tiempo que el país dejaba de ser deudor de las potencias europeas para convertirse en acreedor de ellas. Pero nada de ello importaba. Para la élite establecida, la victoria del radicalismo no representaba más que la revancha de las fuerzas oscuras de la tiranía rosista y los caudillos federales, el retorno de los vencidos de Caseros y Pavón. Y ello les resulta, sencillamente, intolerable. Los usurpadores deben ser expulsados, no importa el costo. Tampoco los métodos.

La restauración conservadora

Tras el interregno de Marcelo Torcuato de Alvear, distinguido clubmen que debió retornar de París para la campaña electoral de 1922 y cuyo gobierno despertó amplias simpatías y adhesiones entre las familias consulares, Yrigoyen prevaleció ampliamente en las elecciones ante los candidatos del Frente Único, especie de prototipo de Unión Democrática que aglutinaba a todos los opositores por su sola condición de serlo, a excepción de algunos socialistas, que esta vez no se sumaron a la derecha. Pero las condiciones de 1928 eran muy distintas de las de 1916. En primer lugar, la oficialidad de un ejército moderno y profesional, ya no apoyaba al viejo caudillo: Algunos graves hechos de corrupción que implicaban a altas esferas gubernamentales, daban crédito a los más disparatados agravios que durante años de despiadada propaganda antirradical había sido dirigida hacia los jóvenes oficiales. Por otra parte, la coyuntura económica había cambiado drásticamente a nivel internacional, lo cual no podía dejar de impactar profundamente en una economía dependiente como la argentina. Adicionalmente, la oligarquía, haciendo gala de su tendencia a ver fantasmas, creía atisbar en cada acto de gobierno o bien señales inequívocas de un bolchevismo confiscatorio y ateo, o bien las maniobras de un imperialismo norteamericano en franco ascenso, lo cual era por demás irritante para un grupo social que se consideraba parte virtualmente inseparable del Imperio Británico¹⁶, como diría el hijo de un excelso general y vicepresidente del “democrático” gobierno del General Justo.

Lo cierto es que ante una situación que no dejaba de volverse más y más delicada, la oligarquía decide que ya es hora de acabar con el juego irresponsable de la soberanía popular y deroga por la fuerza el sistema representativo que ella misma había diseñado cuando las circunstancias le eran propicias. Así, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu, seguido de una tropa poco numerosa, ocupó la Casa Rosada después de haber sido recibido triunfalmente en los barrios residenciales de la Capital Federal. La oligarquía desplazaba al régimen en descomposición del tan odiado “peludo” y estrenaba un método que implementaría repetidas veces durante los siguientes cincuenta años, inaugurando un período de oprobio para los sectores subordinados y dotando al ejército de un poder de veto y de vigilancia sobre el orden político que se ejercería ininterrumpidamente y que conocería de cruentos capítulos.

La vuelta a los probados métodos electorales en 1932 llevó a la presidencia al también general Agustín P. Justo. Distinguido miembro del Jockey Club, con él hacían su reingreso a la Casa Rosada los que a sí mismos se consideraban sus únicos ocupantes legítimos. Y lo hacía en un momento crucial: La crisis financiera mundial llevaba tres años y ya nadie podía atreverse a menospreciarla. La contracción del mercado británico, principal comprador de carne argentina, imponía medidas drásticas. La respuesta oligárquica fue acrecentar aun más la dependencia respecto de la economía británica mediante la firma del pacto Roca – Runciman, justo en el momento en que el Imperio estaba cediendo la primacía a la nueva hegemonía industrial estadounidense: “El gobierno conservador del general Justo no le impondrá [a la élite establecida] sacrificios excesivos a favor de las capas sociales más duramente afectadas por la recesión. Ya era hora de reunir en las mismas manos el poder político y el poder económico, apartando a los ‘demagogos’ de la conducción de los asuntos públicos”¹⁷.

Nuevamente sumergidos, los sectores postergados inician un nuevo movimiento, silencioso como en el pasado, que los configurará en pocos años en una fuerza irresistible. Atraídos a las ciudades por un incipiente proceso de industrialización por sustitución de importaciones que en la segunda mitad de la “década infame” se revelaba urgente, una nueva ola de inmigración, esta vez interna, viene a dar nuevos aires y

fuerzas a los sindicatos. Simultáneamente, y por las propias características de su formación y de su profesión, los militares nacionalistas veían cada vez con mayor preocupación la dependencia del país, que para ellos cobraba forma en la imposibilidad de hacerse de pertrechos y equipamiento ante un bloqueo efectivo ocasionado por una eventual contienda bélica. De hecho, las dificultades experimentadas durante la guerra del '14 eran un agrio recuerdo que agravaba la hipótesis. Sobre todo porque al no explorar ni explotar los recursos petrolíferos, un bloqueo naval dejaría al país a merced de casi cualquier potencia extranjera. Para esto sectores de las fuerzas armadas, la política externa del régimen en general, y el pacto Roca – Runciman muy en particular, significaban una humillación intolerable, una afrenta al honor: “La reserva casi hostil que los militares argentinos manifiestan hacia Gran Bretaña, está en las antípodas de la subordinación voluntaria de los responsables de la economía”¹⁸. De allí que su inquietud se manifestara de diversos modos, impulsando al hábil general Justo a iniciar el mencionado proceso de industrialización, centrando el eje de su política al respecto en la creación e impulso de Fabricaciones Militares, como así también en la construcción de lujosos edificios que aun hoy alojan cuarteles, escuelas militares y ministerios.

Es que una de las consecuencias del golpe de septiembre fue despertar la conciencia política, cuando no las ambiciones personales, de la mayoría de los oficiales. Además, el “fraude patriótico” contradice la conciencia legalista y las virtudes morales militares. Para cerrar el camino de la actividad política de los sectores medios y bajos que había abierto con la Ley Sáenz Peña, la oligarquía abrió el juego a un nuevo actor social, las fuerzas armadas, cuya racionalidad muchas veces vetaría los métodos antidemocráticos y muchas más los llevarían a cabo. Lo cierto es que desde 1930 la opinión de las fuerzas armadas sería un dato innegable de la realidad política argentina.

La otra novedad que traería la “década infame” en cuanto a actores políticos se refiere, sería un grupo de jóvenes intelectuales radicales que reniegan de los premios de los salones literarios y se consagran al estudio y denuncia de la situación de vasallaje del sistema económico, político, social y cultural argentino. Lógicamente confinados al ostracismo por un establishment al que atacan por todos los escasos medios a su alcance, el grupo FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) edita durante algunos años el periódico “Señales”, organiza reuniones y conferencias semiclandestinas y colabora con cuanto político opositor al gobierno de Justo quiera escucharlos. Así es como en 1936, el senador Alfredo Palacios lee en la Cámara Alta, como si fuera propio, un alegato escrito por Raúl Scalabrini Ortiz, que concluye afirmando: “Tenemos una patria cuyos órganos fundamentales no nos pertenecen. El organismo económico es del extranjero y extranjero son los medios de comunicación y transporte. Una nación en esas condiciones no es una nación: es la esperanza de una nación”¹⁹.

La persecución y el aislamiento a que era sometido un grupo considerado pro nazi por la “prensa libre” y “comunista” por el nacionalismo ultramontano, lleva a que se enfrenten con la conducción alvearista, aliadófila y anti yrigoyenista, de la UCR y a que a fines de 1936 se alejaron de “Señales” por un cambio forzado en la orientación del semanario. Ello llevó a que Scalabrini fundara el Diario “Reconquista” con la colaboración de varios forjistas como Arturo Jauretche, Armando Cascella, Jorge del Río y otros. Tras escasos 41 días de existencia, acuciado por la carestía del papel y el desfinanciamiento, el diario cierra sus puertas con una declaración de principios y una certeza: “Hay tal suma de intereses trenzados en contra del interés nacional y aun en contra de la ley del derecho positivo, que el silencio se cotiza como moneda legal. Nosotros no nos permitimos el derecho de mercar nuestro silencio. O somos libres o volvemos a esa napa invisible por

donde corren las energías más vivas de la República. . .”²⁰. Allí retornaron, a esa napa invisible que, cual lava subterránea, comenzaba a incrementar temperatura para convertirse más temprano que tarde en caudal incontenible que modificaría para siempre la fisonomía nacional.

El subsuelo de la Patria, sublevado

El 4 de junio de 1943 un golpe de estado “institucional” llevó a la Casa Rosada a unas fuerzas armadas que deploraban el estado de “debacle moral” en que se hallaba el país tras más de diez años de fraude, corrupción y entrega. Ante la gravedad de la situación internacional y las escasas posibilidades que el país tenía de hacer frente a un esfuerzo bélico prolongado, el gobierno de Ramírez comprendió que no eran tiempos para que los políticos civiles tradicionales continuaran con sus juegos de suma cero en que sólo ellos y los restringidos sectores sociales a los que respondían salían beneficiados.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Coronel Juan Perón supo vislumbrar la potencialidad del actor político que había llevado dos veces a la presidencia a Hipólito Yrigoyen y que los dirigentes tradicionales ignoraban por completo, los trabajadores. Desde un primer momento, Perón percibió que la supuestamente irrelevante secretaría que se le había asignado podía, con el apoyo de sus superiores por supuesto, insertarse en un sitio preponderante. Como el régimen en su conjunto compartía la idea de que sólo un cuerpo social sano y fuerte podía servir eficazmente a los objetivos de la defensa nacional, permitieron que Perón intercediera crecientemente en los conflictos laborales, fallando ya no sólo a favor de la patronal y aprobando sólo aquellos convenios colectivos que fueran realmente equitativos. Además, realizó en pocos meses una actividad considerable en materia de legislación social y laboral, a la medida del carácter arcaico de las relaciones laborales argentinas de entonces. Los conflictos laborales dejaron de ser simples hechos policiales de alteración del orden público. El estatuto del peón aprobado en 1944, que en apariencia no sancionaba nada verdaderamente revolucionario, implicaba sin embargo una intromisión del Estado en las estancias y establecía normas formales allí donde sólo imperaba la buena voluntad del patrón. Este decreto en particular representó la primera de una larga lista de “afrentas” que los grandes propietarios sufrieron por parte de Perón y le valió el odio acérrimo de quienes se sentían identificados con el sistema social que imperaba en el país desde más de un siglo. Demás está decir que también le valió al “Coronel de los trabajadores” la valoración y apoyo de los sectores más postergados de la República, aquella “napa invisible” de la que hablara Scalabrini.

Durante los primeros meses de 1945, mientras Perón ampliaba sus facultades y su figura se hacía cada vez más notoria, en Europa era no menos notorio que la victoria de los aliados era sólo cuestión de tiempo, lo cual llevó a creer a las “fuerzas democráticas” vernáculas que ya era hora de terminar con el régimen militar y volver al liberalismo que parecía imponerse en todo el mundo occidental. Durante los meses que siguieron, la oposición al gobierno de Farrell no cesó de fustigarlo por intermedio de la gran prensa, que ahora gustaba de autodenominarse “prensa libre”. El principal blanco de críticas era, nuevamente, la neutralidad sostenida ante el conflicto bélico que sin embargo beneficiaba, nuevamente también, los intereses agroexportadores. Cuando, a fines de marzo, la Argentina le declaró la guerra a Alemania y Japón, los partidos políticos creyeron ver en ello una claudicación producto de la extrema debilidad del gobierno y se lanzaron al asalto final: Le pidieron al régimen la “rendición incondicional” y el traspaso del poder a la Corte Suprema de Justicia, histórico bastión oligárquico y liberal.

El frente opositor, que no cesaba en sus ataques al gobierno y a su política social, aglutinaba a conservadores y socialistas, a la Unión Industrial y a la Sociedad Rural, a la embajada británica y a la estadounidense, pero también a la UCR y a los sindicatos controlados por el PS y el PC. Ante la masa trabajadora, esos ataques iban dirigidos a los escuálidos pero inéditos beneficios recibidos durante los dos años y medio precedentes. Para las bases radicales, y para muchos de sus cuadros, el contubernio con quienes los habían expulsado del poder primero y proscrito después contrastaba notablemente con el discurso de un Coronel que usaba la retórica yrigoyenista y se proponía como legítimo sucesor del gran caudillo. Para la oficialidad, el ataque al régimen era una afrenta a la institución que acicateaba el espíritu de cuerpo. A comienzos de octubre el ambiente político estaba más que enrarecido. Los enfrentamientos de estudiantes de izquierda con la policía, las masivas manifestaciones opositoras y las agresiones a conscriptos insuflaban los ánimos. Las posiciones se extremaban y mostraban que la opción era Perón y la política social del régimen “nazifascista” o la restauración liberal de las fuerzas democráticas y la Corte Suprema.

Envalentonada por los aires de la historia que parecían soplar a su favor y por el apoyo inesperado de Campo de Mayo, la guarnición militar más importante del país, la oposición consiguió que Perón renunciara el 9 de octubre y que fuese arrestado por la Marina y trasladado a la Isla Martín García el 13. Dos procesos simultáneos se iniciaron en ese momento. Por un lado, los militares que no simpatizaban con el vicepresidente –que no eran pocos– advirtieron que estaban dejándose llevar demasiado lejos por los políticos civiles y comenzaron a vislumbrar el fracaso de la revolución de junio, cuyos objetivos eran compartidos casi de manera unánime. La idea de que un coronel de Infantería, a la sazón Ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación, fuera puesto en manos de la Marina por capricho de los políticos que habían sumido al país en la corrupción e inmoralidad, provocó una ola de indignación entre los oficiales que se encolumnaron sin fisuras detrás de la figura Farrell en apoyo de la institución y del gobierno. Por otro lado, lo que en un primer momento fue consternación ante lo ocurrido y preocupación de cara al futuro, rápidamente se convirtió entre los trabajadores en decisión de actuar en defensa de aquel que por primera vez desde el gobierno los había escuchado.

Así fue como la mañana del 17 comenzaron a cruzar los puentes del Riachuelo para llegar al corazón mismo de la ciudad, ante la complacencia y complicidad de fuerzas policiales. La congregación en Plaza de Mayo, pacífica pero decidida, atemorizó a los jefes militares, decididos a no abrir fuego contra una manifestación en la cual tomaban parte obreros acompañados de sus esposas e hijos. Hacerlo hubiera sido cometer un delito contra la patria que habían jurado defender y que allí se les presentaba en los rostros de quienes clamaban por el que ya era su líder, un conjunto heterogéneo y único, el Pueblo, al decir de un testigo y participante de aquella tarde, Raúl Scalabrini Ortiz: “Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de tambo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la Nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto (. . .) Era el don nadie y el sin nada en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón (. . .) La sustancia del pueblo argentino, su quintaesencia de rudimentarismo, estaba allí presente, afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu”²¹.

Tras un par de intentos fallidos y grotescos de calmar a la multitud, quedó claro que el único que podría evitar que la jornada acabara en disturbios incontrolables era el coronel Perón, en contacto directo con quienes no aceptarían ya ninguna otra maniobra que les despojara de aquello que sabían suyo. La opción era clara y nadie podía abstenerse de tomar partido: Perón o la revancha de los políticos; los militares nacionalistas o la oligarquía anglófila. El Pueblo, o el Imperio.

El “aluvión zoológico” del 17 de octubre, los descamisados “metiendo las patas en la fuente”, fue una imagen funesta, terrible, para una oligarquía que había reaccionado exageradamente ante el obrerismo de Yrigoyen y que no estaba dispuesta a tolerar un nuevo gobierno “plebeyo”. Cerrada como estaba la vía militar para intentar retornar al poder, puesto que el ejército apoyaba claramente a uno de los suyos, a la élite establecida no le quedó otra opción más que aceptar aquello que habían pedido y que ahora temían, elecciones. A diferencia de otras veces, la unificación de todo el espectro político detrás de la candidatura de los radicales Tamborini y Mosca, mostraba el peligro que la figura y programa de Perón representaba para la oligarquía. De hecho, si bien la “Unión Democrática” estaba formada únicamente por los partidos políticos “progresistas”, contaba con el apoyo, simpatía y colaboración del Partido Conservador, de los grandes diarios, de la Sociedad Rural, de la UIA y de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Es decir, todos los poderes estatuidos estaban embarcados en hacer fracasar aquél intento de dignificación nacional y popular que encarnaba el Coronel Perón.

Un aliado “natural” de la Unión Democrática era la embajada de los Estados Unidos, en la figura de su embajador Spruille Braden, un tosco y arrogante diplomático, fiel representante de la soberbia de una potencia imperial que se sabía en la cima del poderío mundial. Hacia fines de 1945 y en plena campaña electoral, publicó el “Libro Azul”, fruto de la fastidiosa tendencia que por aquellos años tenía el Departamento de Estado de ver nazis en todas partes, y que denunciaba la supuesta connivencia del régimen y de Perón con las potencias del Eje. La jugada no podría haberles salido peor. El contenido del libro fue interpretado como una nueva intromisión extranjera en asuntos de política interna y dio al Justicialismo un slogan electoral inmejorable: “Braden o Perón”. Confiadas en ser la encarnación de un ideal democrático que siempre vilipendiaron, y por ello mismo seguras de su triunfo, las fuerzas de la oligarquía no percibieron lo perjudicial de semejante adhesión y menospreciaron la capacidad de un pueblo decidido a hacer valer los derechos que la Constitución de 1853 les reconocía y que hasta entonces eran letra muerta. El 24 de febrero de 1946 ese pueblo le dio la victoria a Perón con el 55% de los votos, en una elección de una limpieza como no se recordaba desde 1928. La tarea de reivindicación material iniciada en 1943 se consolidaba y daba inicio a la etapa de reparación social y cultural de aquellos sectores derrotados en 1862 y condenados por casi un siglo de predominio oligárquico y liberal. La República Argentina no volvería a ser la misma.

La reivindicación de los sectores oprimidos

Lo primero y quizá más importante que cabe decir al respecto es que esos diez años de gobierno Peronista le han dado a la Argentina una característica distintiva en el contexto latinoamericano, marcada por el reconocimiento de la valía, importancia y potencialidad que los sectores subalternos tienen de sí mismos. La Argentina es una sociedad en la cual el corte entre los diversos “grupos de status” es por lo menos difuso, donde el “cierre social” tan vigente y palpable en la mayoría de las sociedades latinoamericanas

prácticamente no se percibe. El Peronismo borró de la conciencia nacional la idea oligárquica y positivista de que existen mejores y peores, probos e indignos. Idea que durante mucho tiempo fue sostenida por los vencedores de Pavón y sus descendientes y que estructuró el sistema político y social estableciendo una barrera infranqueable.

Y si bien es cierto que semejante fenómeno no puede bajo ningún punto de vista ser explicado por la ocurrencia de este único factor, no es menos cierto que la doctrina Justicialista vino a potenciar determinados elementos presentes en la sociedad que de otro modo hubieran permanecido aletargados. El carácter elitista e ilustrado de la élite gobernante durante el período agroexportador, que llevó al desprecio del valor humano y económico de los pueblos indígenas y criollos y a su consiguiente genocidio, provocó la inevitabilidad del fomento de la inmigración ultramarina masiva, trayendo a estas tierras a seres portadores de largas tradiciones de lucha y esfuerzo, pero también de un respeto reverencial a la jerarquía social basado en la religión y no en la ciencia o el poderío económico. La abundancia aparentemente sin límites de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX permitió cierta movilidad social ascendente, incrementada sin duda por el desarrollo exagerado del aparato estatal y del sector terciario de la economía, imprimiendo en la conciencia de los sectores desfavorecidos la esperanza, a veces vana, a veces cierta, de mejorar las condiciones de vida de sus descendientes. Esto se veía reforzado porque, como dijimos, la Argentina era una élite ilustrada y positivista, lo cual la llevaba a difundir y tratar de fomentar el ideal de progreso como así también la escolarización, que también cumplía la función ideológica de arraigar a los inmigrantes mediante la apertura de una posibilidad de mejora. Adicionalmente, la Reforma Universitaria de 1918 democratizó el sistema universitario argentino permitiendo el acceso a la educación superior a una amplia franja de sectores medios hasta entonces marginados. Por último, hay que mencionar que la existencia de un partido de las características y significación de la Unión Cívica Radical, sobre todo bajo la conducción yrigoyenista, y la obligación que le impuso al orden conservador de establecer un régimen electoral universal y libre de fraude son antecedentes ineludibles a la hora de examinar el sentimiento de dignidad de los sectores populares argentinos.

Sin embargo, todos estos factores, referencias válidas e insoslayables en el análisis que estamos intentando, a principio de la década de 1940 no eran más que eso, una serie de procesos con algún grado de conexión entre ellos que hasta entonces no habían logrado configurar un fenómeno capaz de dar a sus protagonistas la fortaleza necesaria para disputar seriamente la primacía de los sectores dirigentes tradicionales. Fue necesaria la aparición de la figura de un militar de un genio político indiscutible (en una coyuntura histórica mundial muy particular) para que, con el apoyo de un actor político relevante como el ejército, en muy pocos años aquellos factores y actores hasta entonces dispersos y dominados precipitaran en una corriente que cambiaría para siempre la faz política, social y cultural de la República Argentina.

La por momentos exagerada violencia declamatoria de Perón contra la oligarquía derrumbaba, ante los ojos de los trabajadores, el mito dorado de las familias tradicionales instaladas en el pedestal de la historia a caballo de un sistema escolar diagramado por Domingo Faustino Sarmiento y de una historiografía delineada por Bartolomé Mitre, íconos y emblemas de esa tradición cuya gloria era ahora puesta en duda por primera vez. La vida cotidiana del país se había modificado, y con la misma mezcla de orgullo y arrogancia que declaraban una huelga y la ganaban, ahora los trabajadores, la gente humilde, se abalanzaban sobre los bienes de consumo casi suntuario y sobre lugares, paseos y esparcimientos antes inaccesibles. Los espectáculos del centro de la ciudad, las

cenar en lugares elegantes, los paseos por la calle Florida ya no eran privilegio exclusivo de las clases medias y acomodadas, como tampoco lo siguieron siendo las vacaciones en la antes inaccesible Mar del Plata. El régimen peronista tendió, sobre todo durante los primeros años, a favorecer a los más olvidados, a los menos favorecidos por los tiempos pretéritos. Así, durante esos años, el salario y los beneficios de un peón o de un obrero se incrementó mucho más que los de un docente o un empleado público, limando las diferencias socioeconómicas entre las clases bajas y los sectores intermedios, de modo intolerable para estos últimos que, al verse cada vez más parecidos a los “cabecita negra” que despreciaban, se volcaron masivamente al antiperonismo. Esa tendencia: “. . . era una fuente de antiperonismo social irreductible. El poder sindical, la eficacia de las convenciones colectivas, tribunales de trabajo que tomaban partido sistemáticamente contra la patronal, la multiplicación de puestos industriales, constituían los elementos que transformaban la condición obrera y umentaban la desazón de las clases medias. La distancia que las separaba de los trabajadores manuales se acortaba acelerada y visiblemente, las remuneraciones y los estilos de vida se iban acercando (. . .) La nueva dignidad adquirida por una clase obrera en pleno crecimiento era vista como una subversión intolerable de las jerarquías sociales y una revancha de los humildes”²².

Por otra parte, la figura de María Eva Duarte de Perón, no hacía otra cosa que reforzar ese nuevo ideario Justicialista y las prevenciones de todo tipo que las clases medias y altas albergarían contra “esa mujer”. Desdeñando desde el primer momento el lugar decorativo que la tradición reservaba a la primera dama, su papel reivindicativo no se circunscribía a los “más desprotegidos” en general, sino que hizo especial énfasis en quebrar, aunque más no sea en parte, el rol que el modelo de sociedad que se pretendía dejar atrás había destinado a la mujer, quien desistía de ser una sumisa ama de casa, casi una sirvienta, para pasar a intervenir activamente en la vida política y económica de la familia y de la sociedad toda: “no es posible que la mujer argentina ni la extranjera, que deja de serlo cuando se cobija bajo el amparo tutelar de nuestro cielo generoso, no tome su puesto de lucha en el combate. Y debemos considerar que nuestra fortaleza física llega hasta donde llega la del hombre, para eso somos sus madres, sus esposas y sus novias. Allí, en el puesto de lucha, al lado del hombre, está nuestro lugar”²³. Y así como Evita reclama a la mujer argentina que esté presta a tomar su lugar en la lucha, también declara y defiende sus virtudes y sus capacidades, reclamando para ella los derechos que tantos deberes asumidos le otorgan: “Nos hemos colocado en un plano social nuevo. La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó a la Plaza de Mayo el 17 de octubre (. . .) no puede ser solamente la espectadora de los movimientos políticos. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo (. . .) Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes, sin pedir el mínimo de sus derechos (. . .) La mujer argentina ha llegado a la madurez de sus sentimientos y sus voluntades. La mujer argentina debe ser escuchada, porque la mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Se está en deuda con ella. Es forzoso restablecer, pues, la igualdad de derechos, ya que se pidió y se obtuvo, casi espontáneamente, esa igualdad en los deberes”²⁴.

Más allá de los intentos de Perón de lograr un sistema social de armonía entre las clases, que se delineaba en su idea de Comunidad Organizada, el tono reivindicativo de su oratoria y de su política tendió a generar aun desde antes de su llegada a la presidencia una fuerte polarización política. Habiendo quedado atrás la dicotomía entre aliadófilos y germanófilos, en la Argentina de 1945-1955 se era peronista o antiperonista.

Prácticamente no había espacio para posiciones intermedias o para indeferencias. Se gritaba “la vida por Perón” o se vivaba al cáncer que consumía la vida de Evita. Así, el amplio espectro opositor tendió a ignorar las múltiples divergencias internas existentes y se aglutinó en una oposición furibunda. La reforma constitucional de 1949 introdujo, entre otras innovaciones trascendentales, la posibilidad de la reelección presidencial, que le permitió a Perón postularse para un segundo mandato en las elecciones de 1951. El triunfo rotundo obtenido el 11 de noviembre de 1951, en que la fórmula Perón – Quijano obtuvo el 62% de los votos contra el 32% de Ricardo Balbín de la UCR, “servirían para convencer a la oposición de la imposibilidad de luchar contra Perón con medios electorales”²⁵. De hecho, pocos meses antes de las elecciones un importante levantamiento en Campo de Mayo fue abortado por las fuerzas leales al presidente, demostrando una vez más que el ejército era uno de los principales sostenes de Perón.

Como parte de su política reparatoria, el gobierno hizo esfuerzos por mejorar la condición de los suboficiales de las tres armas y por permitir el acceso de sus hijos a las escuelas de oficiales. Cabe recordar que el sistema militar argentino separa a oficiales de suboficiales por una barrera literalmente infranqueable, por lo cual por ejemplo un teniente recién egresado del Colegio Militar está por encima y merece la obediencia de un capitán o sargento con veinte años de carrera o más. Perón buscó ganarse el apoyo incondicional de la suboficialidad mediante ciertas concesiones y mejoras a su condición profesional al tiempo que dejaba correr los rumores respecto de la posibilidad de eliminar esa barrera. Respetuoso de las jerarquías y de las tradiciones marciales como era, Perón se guardó esa medida en reserva para utilizarla sólo en caso de recrudecer la agitación militar. Así, en 1954, cuando arreciaban las conspiraciones urdidas en el seno de las fuerzas armadas y los grupos opositores contaban cada vez con mayor apoyo de ciertos sectores de la oficialidad, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que entreabría las puertas de la élite militar a la suboficialidad. Lejos de atemperar los ánimos, esto contribuyó a que los sectores profesionalistas o indecisos de la oficialidad se volvieran opositores, particularmente en la marina, la más cerradamente antiperonista de las tres armas. Simultáneamente, la imagen de las multitudes aclamando las brutales arengas antioligárquicas vociferadas desde los balcones de la Casa Rosada, generaban inquietud en un cuerpo militar para el que la sacrosanta jerarquía era un valor fundamental. Es que ante los ojos militares no podía sonar menos que contradictorio un régimen que pregonaba la armonía social al mismo tiempo que disparaba consignas “clasistas”. Así fue cómo paulatinamente la causa peronista fue perdiendo adeptos militares, al tiempo que las certezas crecientes de la delación practicada por numerosos suboficiales respecto de sus superiores opositores no hacían más que convencer a buena parte de los mandos intermedios de la necesidad de terminar con la “tiranía”.

La revancha de la oligarquía

Tal vez sea sólo la magnitud del rechazo que el peronismo provocó en sectores minoritarios pero indudablemente crecientes de la sociedad argentina lo que pueda brindar una dimensión de los cambios que encarnaba. No sólo políticos. No sólo económicos. Esos diez años de gobierno peronista modificaron para siempre la estructural sociocultural argentina. De allí que los que se sentían perjudicados por esa transformación reaccionaran con tal virulencia. Hemos intentado señalar a lo largo de estas líneas lo “natural” que las clases más favorecidas consideraban su condición de tal y lo furiosamente que podían llegar a defender sus “indiscutibles” privilegios. Así como en el siglo XIX proclamaban abiertamente la inferioridad de las “razas” nativas y no vacilaron en exterminarlas, durante el decenio 1945-1955 no cesaron en pregonar la venalidad, la

inmoralidad y lo antiestético de los “cabecitas negras” y sus representantes en el poder y tampoco vacilaron en expulsarlos del centro de la vida social, económica y política apelando a cualquier método disponible. Desde la calumnia al asesinato liso y llano, desde la intriga al bombardeo sobre las calles de la ciudad repletas de manifestantes y transeúntes, la sed de venganza de la horrorizada oligarquía parecía insaciable. Es que los sectores dominantes argentinos nunca tuvieron empacho en manchar sus manos de sangre a fin de preservar sus privilegios: El triple genocidio de fines del siglo XIX y un número jamás determinado de víctimas fatales en los sucesos del 16 junio lo prueban; y volverían a probarlo cada vez que lo consideraran necesario.

Una vez más, el antagonismo trasmutaba en enfrentamiento. La política retornaba a antiguas formas cada vez más violentas. La “experiencia histórica nacional” volvía a conceptualizarse bajo el signo potencial de la guerra. Sin embargo, y a pesar del rabioso “¡por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos!” que lanzó un su último discurso desde los balcones de la Casa Rosada, el mismo Perón se opuso a armar las milicias obreras que había impulsado Evita en su momento, y que bien podrían haberse puesto en funcionamiento en 1955, cuando ante los ataques militares de junio y septiembre cientos de obreros se dirigieron al edificio de la CGT reclamando armamentos y dispuestos a dar “la vida por Perón”. Es que Perón había visto el horror de la guerra civil española en los años 30 y en ese momento crítico, es dable suponer que prefirió ofrecer su alejamiento como bálsamo para saciar a los insaciables y evitar una cantidad aun mayor de muertos civiles.

La caída de Perón significó un triunfo inolvidable para la oligarquía y la pequeña burguesía de las grandes ciudades. Por ello mientras se brindaba con champán del caro en los salones de Barrio Norte y en la Sociedad Rural, en la Bolsa de Comercio y en los directorios de las empresas, una ola de consternación y de amargura se cernía sobre las barriadas obreras y los pueblos del interior, sobre los talleres y sobre las barracas de los cuarteles. Por eso en septiembre de 1955 la “prensa libre” celebraba alborozada el final de la “segunda tiranía” representando fielmente a un importante sector de la sociedad argentina que consideraba que había llegado un tiempo nuevo, un tiempo de revancha. Un desagravio que sólo la ingenuidad de Eduardo Lonardi podía no percibir: “Las ‘fuerzas vivas’ y los partidos políticos –de izquierda a derecha, y con pocas excepciones– se aferran con fervor al mesiánico brazo armado, que como un poderoso ‘Deux ex machina’ viene a eliminar de la escena al protagonista de la pesadilla que, en realidad, es el pueblo. . . porque la ‘Libertadora’ no se hará –como lo pretende el inocente Lonardi– contra un hombre, ni siquiera contra los aspectos corruptos de un régimen. Se hará para borrar lo que el peronismo ha significado en cuanto irrupción popular en la vida política. En cuanto intento de economía nacional y justicia social”²⁶.

Como dijimos anteriormente, sólo la magnitud de la reacción puede dar una cabal idea de la real significación que diez años de gobierno peronista tuvieron en la conformación social argentina. Y no nos referimos al alborozo experimentado por la pequeña burguesía de los grandes conglomerados urbanos que salió a las calles a celebrar la caída del régimen. Tampoco hacemos referencia a los titulares de los grandes diarios que vivaban abiertamente a la “Libertadora”. Unos y otros ya habían reaccionado de igual modo ante hechos mucho menos trascendentes para la configuración histórica nacional, y lo volverían a hacer. Por otra parte, esa reacción eufórica es hasta cierto punto comprensible, pues en ese momento pensaron que aquellos sectores que tanto odiaban había desaparecido para siempre del centro de la escena. El pueblo argentino se encargaría de demostrarles que estaban equivocados.

A lo que nos referimos, más bien, es al intento organizado y consciente de retrotraer la historia a los tiempos previos a 1943-45, en que Perón y Evita no existían, en que los sindicatos estaban controlados por fuerzas políticas opositoras pero funcionales y, sobre todo, ese tiempo añorado en que los que ahora los enfrentaban desde la clandestinidad de la Resistencia Peronista estaban relegados al subsuelo patrio y no contaminaban la vista de los paseos públicos con su dignidad humana auto reconocida. Por eso la represión fue brutal; por eso se persiguió y encarceló a miles de dirigentes políticos y sindicales por el sólo delito de ser peronistas; por eso se destruyó toda la obra de la Fundación Eva Perón llegando al paroxismo de quemar innumerable cantidad de elementos por el solo hecho de tener impreso el escudo Justicialista; por eso el Plan Prebisch volvió a poner la economía nacional en manos externas; por eso profesores eméritos de la Universidad de Buenos Aires disertaban sobre la imperiosa necesidad de derogar la Constitución promulgada en 1949 y retornar a la sacrosanta Constitución liberal de 1853. Por eso no les tembló el pulso para violar el texto de esa misma venerada Carta Magna, que en su artículo 18 dice que “Queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos”, y en junio de 1956 fusilaron, escudándose en un decreto presidencial, a treinta y ocho civiles y militares, convirtiendo al General Valle en el primer y único golpista argentino condenado a la pena de muerte por rebelión armada. Además, contrariaron todo el derecho penal vigente aplicando con retroactividad la ley marcial dictada el 10 de junio a 12 civiles arrestados el día anterior, a los cuales fusilaron sin juicio ni sumario de ningún tipo en los basurales de José León Suárez.

La pretensión de hacer desaparecer al peronismo, de desperonizar a la sociedad argentina como si sólo se hubiera tratado de un mal sueño que se desvanece con sólo despertar, se revelaría más temprano que tarde en ilusoria e impracticable. En las circunstancias que se vivían a mediados de 1956, marcada por un contexto de huelgas muy duras, continuos sabotajes de la producción y una desobediencia civil que enrarecía el ambiente político y social, el régimen oligárquico y liberal no tenía más alternativa que quebrantar permanentemente no sólo la ley y la Constitución sino sus propios enunciados. Ante la creciente organización de la Resistencia Peronista, el levantamiento de Valle acorralaba al régimen y le imponía la necesidad de actuar con un rigor que Perón jamás había aplicado contra sus enemigos: “Aramburu estaba obligado a fusilar y procribir, del mismo modo que sus sucesores hasta hoy se vieron forzados a torturar y asesinar por el simple hecho de que representan a una minoría usurpadora que sólo mediante el engaño y la violencia consigue mantenerse en el poder. La matanza de junio ejemplifica pero no agota la perversidad del régimen. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohíbe nombrar a Perón o la operación clandestina que arrebató el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son expresiones de un odio al que no escapan ni lo objetos inanimados (. . .) el humanismo liberal retrocede a fondos medievales: pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales”²⁷.

Los fusilamientos 1956 son la expresión cruda y terrible de la revancha que la oligarquía emprendió contra todo el andamiaje social, político, económico y cultural del peronismo. Significan un cierre circunstancial, momentáneo, a una etapa de la historia argentina en que el antagonismo entre el pueblo y la oligarquía pasó de la sumisión y la obediencia al desafío abierto y declarado. Pero por sobre todo, representan el intento de los sectores dirigentes tradicionales de acabar con esa etapa de dignidad obrera que, sin embargo, marcaría en lo sucesivo el devenir político y social de la nación. Derrotados, una vez más

como en el pasado, los sectores populares argentinos no abandonaron la lucha por aquello que el peronismo les había mostrado que les correspondía: Su dignidad humana. Nuevamente se retiraron a esa napa invisible, al subsuelo de la patria, para recomenzar la lucha de Resistencia cuyo objetivo era el retorno del Líder y de las posibilidades de reafirmación cultural y simbólica que él encarnaba. De ese Líder que al asumir la presidencia por vez primera exclamaba: “Quienes quieran oír que oigan; quienes quieran seguir que sigan. Mi empresa es alta, y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo. Mi guía es la bandera de la Patria”²⁸.

El Pueblo argentino lo oyó. Lo siguió. Y le juró lealtad. Eso es lo que nunca lograron comprender quienes no quisieron oírlo. Y le costó muy caro a la Nación Argentina toda.

¹ Argumedo, A. (1992). *Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires: Colihue, Ediciones del Pensamiento Nacional, 254-255.

² Cárdenas, G. (1969). *Las luchas nacionales contra la dependencia. Historia Social Argentina. Tomo I*, Buenos Aires: Galerna, 222.

³ Oszlak, O. (1985). *La formación del Estado Argentino*. Buenos Aires: Ariel, 41-42.

⁴ *Ibidem*, 55.

⁵ Cárdenas, G. (1969). *op. cit.*, 236-238.

⁶ Halperín Donghi, T. (1995). *Una nación para el desierto argentino*. Buenos Aires: CEAL, 139.

⁷ Cárdenas, G. (1969). *op. cit.*, 243.

⁸ Rouquié, A. (1981). *Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo I*. Buenos Aires: Emecé, 38.

⁹ Jauretche, A. (1980). *Manual de zoncercas argentinas*. Buenos Aires: Peña Lillo, 45.

¹⁰ Alberdi, J. B. (1966). *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*. Buenos Aires: EUDEBA.

¹¹ Para un detalle de cómo se distribuyeron las tierras, ver Cárdenas, G. (1969). *op. cit.* 278.

¹² Rouquié, A. (1981). *op. cit.* 40-41.

¹³ *Ibidem*, 50-51.

¹⁴ *Ibidem*, 67.

¹⁵ Echeverría, E. (1948). *Dogma Socialista y otras páginas políticas*. Buenos Aires: Estrada, 157.

¹⁶ Julio A. Roca (h), habría dicho en un discurso oficial: “*La Argentina es, por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido*”, a lo cual un colaborador suyo, Guillermo Leguizamón, habría agregado: “*La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de Su Graciosa Majestad*”. Citado en Puiggrós, R. (1968). *Historia crítica de los partidos políticos. IV. La democracia fraudulenta*. Buenos Aires: Jorge Alvarez, 114.

¹⁷ Rouquié, A. (1981). *op. cit.* 254.

¹⁸ *Ibidem*, 294.

¹⁹ Citado por Galasso, N. (1984). *Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa*. Buenos Aires: CEAL, 39.

²⁰ *Ibidem*, 50.

²¹ *Ibidem*, 68.

²² Rouquié, A. (1982). *Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo II*. Buenos Aires: Emecé, 89.

²³ Discurso radial pronunciado por Eva Perón el 25-07-1945 transcrito por Hurst, C. E. y Roch, J. M. (1985). *Eva Perón. Discursos completos. Tomo I 1946-1948*. Buenos Aires: Megafón, 11.

²⁴ Discurso radial pronunciado por Eva Perón el 27-01-1947 transcrito por Hurst, C. E. y Roch, J. M. (1985) *op. cit.*, 33.

²⁵ Maceyra, H. (1984). *La segunda presidencia de Perón*. Buenos Aires: CEAL, 38.

²⁶ *Ibidem*, 62.

²⁷ Walsh, R. (1972). *Operación Masacre*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 197.

²⁸ Discurso pronunciado por Juan Domingo Perón ante la Asamblea Constituyente, el 4 de junio de 1946, en ocasión de asumir la Primera Magistratura de la Nación, citado por Bonasso, M. (2006) *El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo*, Buenos Aires: Booket, 62.